

ALCANCE DE LA REPRESION EN NAVARRA

José María Jimeno Jurío

INTRODUCCION

AL TERMINAR SU PONENCIA LOS SRES. PASCUAL Y GRANJA EL martes, alguien protestó por no haber hablado de los 10.000 asesinados por los rojos en Madrid. Estaba en su derecho. Pero es que de esos muertos, de los once obispos, 4.200 sacerdotes seculares, 2.500 religiosos, 45 religiosas y cerca de 400.000 católicos seculares “asesinados por la horda roja” (1), hemos estado oyendo hablar durante cincuenta años. Reconocemos el derecho del vencedor a contar su versión, y el del general del ejército a investigar sobre las víctimas de la represión en Navarra y a decirnos el número de ejecutados. Pero ya va siendo hora de que se deje a otros investigar y contar la historia, y de “exigir que se nos deje a nosotros, los familiares, amigos y compañeros de los asesinados contar con nuestros propios muertos”, como dice el colectivo Altaffayla en el prólogo de su obra (2).

Fijamos la atención en Navarra y en la represión sufrida por un sector de la población. Intentaré apuntar los rasgos que considero más destacables, con toda la delicadeza que el tema exige y con objetividad, empeño ciertamente difícil, perseguido por todos los historiadores pero que, pese a todo, conduce a resultados y valoraciones tan distintos.

Si observamos la evolución en Navarra descubrimos una sucesión de guerras y enfrentamientos: contra visigodos, musulmanes y carolingios; contra Castilla y Aragón; entre agramonteses y beaumonteses; participación en campañas militares en Italia, Países Bajos, Cataluña y Ultramar; guerras de Sucesión, contra la Convención francesa y Napoleón; entre constitucionales y realistas, entre carlistas y liberales. La guerra cuyo cincuentenario celebramos tuvo en Navarra una peculiaridad insólita. Ciertas manifestacio-externas la asemejan a una cruzada religiosa medieval, pero sin embargo esta “cruzada española” ofrece un notable rasgo diferencial. Mientras las campañas cristianas que culminaron en 1.119 con la conquista de Tudela y su albará respetaron vidas, credo y praxis religiosa de las comunidades étnicas musulmanas y judías, nuestra guerra se ensañó implacable contra un sector de la población, de forma solo comparable con las atrocidades cometidas por los generales franceses Reille y Abbé, y las represalias de Espoz y Mina, durante la guerra contra Napoleón.

PRECEDENTES

Para comprender de algún modo la acción represiva, sus causas y secuelas, será preciso conocer algunos aspectos de nuestra sociedad.

Realidad económico-social: La provincia censaba 345.883 habitantes en 1.930. La mayor parte vivía de la agricultura (64% de la población activa). La tierra estaba muy desigualmente repartida entre grandes terratenientes (56,4%), medianos (30,6%) y pequeños (13%). Existía un elevadísimo porcentaje de braceros (jornaleros y renteros) carentes de propiedad (3).

Con los antiguos aristócratas terratenientes alternaba una dinámica burguesía, en parte beneficiada con la privatización de corralizas y egidos comunales desamortizados, que prefirió invertir en adquirir una tierra barata, y en su roturación y puesta en cultivo, que en promocionar una industria moderna. Esto reafirmó el carácter agrario y conservador de la provincia e incrementó la pobreza del campesinado, su emigración y sus reivindicaciones de tierras, enfrentando a “comuneros” desposeídos contra los poderosos “corraliceros”, con largo saldo de jornaleros muertos a tiros en varios pueblos.

Los latifundistas se agrupaban en la “*Asociación de Propietarios Terratenientes de Navarra*” y los labradores propietarios en la “*Federación Católico-social o Federación Agro-Social de Navarra*”, controlada por la clerecía y los terratenientes. Para los obreros y braceros se abría un abanico sindical formado principalmente por “*Solidaridad de Obreros Vascos (SOV)*”, el “*Sindicato Unitario*” y la “*Unión General de Trabajadores*”, el más numeroso de todos.

La industria era escasa, en buena parte vinculada al sector agropecuario y forestal, y centrada en Pamplona, Villava, Aoiz, Oroz-Betelu; en Tudela, Marcilla, Cortes; en Alsasua, Olazagutía, Bera; en Estella y Lodosa. Existían importantes enclaves ferroviarios en Pamplona, Alsasua y Castejón, y estaba en construcción el canal de Yesa, que ponía en presencia de obreros en este pueblo, en Sangüesa y Cáseda.

Realidad político-religiosa: El predominio de la población rural, diseminada por pequeños núcleos urbanos en buena parte de la Navarra septentrional y media, la convertían en reducto conservador, donde apenas hicieron mella las corrientes de libertad, respeto y democracia preconizadas por la República. Contribuyó a ello un clero numeroso, de criterios dogmático-morales intransigentes y a la sazón disgustado e irritado por el carácter “ateo” de la Constitución española y las medidas adoptadas por el Gobierno y los alcaldes en materia religiosa y por la actitud de ciertas familias que dejaron de cumplir los deberes religiosos y celebraban ostentosas bodas, entierros y “bautizos” civiles.

Las elecciones del período, singularmente las de 26 de junio de 1.933 y 16 de febrero de 1936, que dieron la totalidad de actas de diputados a candidatos de la derecha, patentizan el carácter conservador de la población.

Los monárquicos se dividían en dos grandes bloques: los alfonsinos, agrupados en la CEDA, y los carlistas. Tenían como órganos de expresión periódica el “*Diario de Navarra*” y “*El Pensamiento Navarro*”. Los dirigentes de ambos sectores coincidían en la defensa de unos intereses económicos y religioso-católico comunes. Las bases carlistas en el medio rural, generalmente “impensantes”, vivían sometidas a los dirigentes, contaban con armamento y se adiestraban militarmente para luchar de nuevo “por Dios, por la Patria y el Rey”. Sus dirigentes venían conspirando y en vísperas del alzamiento se pusieron a las órdenes de Mola.

Desde la escisión mellista de 1.919, los jaimistas navarros mantuvieron una entente bastante cordial con los nacionalistas vascos, de la que fue expresión “*Alianza Foral*” en 1.923. A raíz de la fusión de Integristas y Jaimistas (10 de enero de 1932) y del fracaso del Estatuto vasco (junio 1932), la ruptura fue profundizándose, endureciéndose los ataques contra el nacionalismo, y aumentando los odios, singularmente contra la carismática figura de Manuel Irujo y Olló, candidato que en las elecciones de febrero de 1936 obtuvo en solitario para el PNV el 9,2% de los votos.

Los grupos autoritarios de signo fascista hicieron su aparición en Pamplona, Tudela, Estella y su comarca, dando tempranamente pruebas de agresividad. Falange Española pasó a ser el partido mayoritario al iniciarse el alzamiento.

Entre las denominadas IZQUIERDAS estaban los republicanos de diferentes tendencias (federal, autónoma, radical de Lerroux, radical socialista de M.Domingo, y *Acción Republicana*), muchos de ellos agrupados después en *Izquierda Republicana*; los Socialistas, con el sindicato UGT y la *Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra* los anarquistas de la CNT., caracterizados por un dinamismo arrollador y contagioso y por inquietudes culturales plasmadas en sus bibliotecas y grupos de teatro y en el *Ateneo* de Allo. El PC. y ANV. eran minoritarios.

Los partidos republicanos se nutrían principalmente de profesionales y labradores de ascendencia liberal, mientras los de carácter obrero lo estaban por jornaleros de la industria y el campo, y algunos profesionales (abogados, médicos, maestros) que les apoyaban en sus reivindicaciones. Unos y otros veían al clero excesivamente vinculado con los intereses oligárquicos y conservadores, y el alejamiento de las prácticas religiosas y sacramentales fue haciéndose cada vez mayor.

Es importante recordar que en las elecciones del Frente Popular el bloque de derechas obtuvo el 69,1 por ciento de votos, pero que un 30,9 por ciento (casi un tercio del electorado) repartió los suyos entre la coalición del Frente Popular (21,7%) y el PNV (9,2%), a los que habría que añadir los anarquistas que pasaban de elecciones. Estos votantes se localizaban principalmente en los valles pirenaicos nororientales, en poblaciones con núcleos republicanos o de obreros industriales, ferroviarios o del canal de Yesa, y en la Ribera.

Realidad institucional: Cuando Navarra pasó de reino independiente a provincia española, los liberales autores del cambio sustituyeron las instituciones privadas por otras y mantuvieron la Diputación con siete miembros, elegidos ahora por distritos (y no por estamentos sociales, lo que permitió excluir al clero.) Convertida en el máximo organismo de gobierno, lograron mantenerla bajo su control. Desde marzo de 1935 regía la provincia una gestora netamente derechista. A raíz del triunfo del Frente Popular, la oposición reclamó su cese entre otras razones por oponerse a la reforma agraria y defender los intereses de los terratenientes, mientras la derecha la mantenía tenazmente alegando razones de foralidad, según explicó Angel Pascual.

Los carlistas tenían una “Junta Central” y “Juntas de Merindad”. Al estallar la sublevación, aparecieron en muchas poblaciones las “Juntas de guerra” locales, popularmente conocidas como “Juntas de matar”, entre cuyos componentes era corriente la presencia de un sacerdote (párroco o coadjutor).

LA REPRESION SANGRIENTA

El 18 de julio por la tarde, confirmadas las noticias de la sublevación militar, José Rodríguez Medel, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Navarra, leal a la República, acababa de dar la orden de concentrar efectivos del Cuerpo en Tafalla, cuando fue muerto por sus propios subordinados y por orden de Mola. Al día siguiente, mientras se concentraban en la Plaza del Castillo cientos de requetés para ir voluntariamente a luchar por Dios y por España, piquetes de requetés y falangistas, uniformados y armados, publicaban por los pueblos el “Bando de guerra” del general Mola y se producían las primeras muertes violentas en Azagra, Cascante, Corella Falces Lodosa, Pamplona y Tudela. Los falangistas asaltaron en Pamplona los locales de “Izquierda Republicana” para convertirlos en su sede. Los carlistas montaron su cuartel-cárcel en Escolapios. Los comandantes de puesto de la Guardia civil de la provincia cumplieron órdenes de sustituir alcaldes y concejales por otros adictos al movimiento, responsabilizándose aquella oficialmente de las detenciones de unas personas, cuyos nombres publicaba la prensa diaria, y que para entonces habían aparecido muertas en descampados.

Las nuevas autoridades locales o las Juntas de Guerra obligaban a los hombres de izquierda a llevar permanentemente un brazalete, y confeccionaron listas de vecinos que entregaban a la Guardia Civil o a los jefes de piquetes para proceder a detenciones, prisión, ejecuciones, requisas, cortes de pelo a mujeres, destierro de familias y otros castigos.

Estos hechos provocaron desde el primer día la fuga de hombres que intentaron pasar a Francia o a las provincias próximas de que creían leales a la República (Guipúzcoa, Zaragoza, la Rioja), o esconderse en el regadío en espera de que pasara la tormenta.

Durante dos meses, desde el 18 de julio hasta el 19 de septiembre incluido, no pasará un solo día sin que se produzcan ejecuciones de navarros en Navarra. La Junta Central Carlista publicó un comunicado el 26 de julio invitando a los huídos y escondidos a presentarse a las Autoridades, prometiendo respetar sus vidas. Muchísimos se entregaron confiados, y fueron asesinados. Las sacas se intensificaron con motivo de solemnidades religiosas (Santiago, Ascensión, procesiones con las Vírgenes del Sagrario, del Puy, del Olmo), de conquistas de poblaciones, o al llegar cadáveres de voluntarios desde el frente. Menos conocido es lo que sucedió a seis voluntarios requetés del valle de Yerri (4 de Ibiricu y los otros de Arizala y Murugarren), casi todos casados y con varios hijos pequeños; estando en el Alto de los Leones decidieron volver a sus hogares y desaparecieron para siempre durante la primera quincena de agosto, según consta en el Libro de Difuntos de la parroquia, presumiéndose que fueron ejecutados como desertores.

A lo largo de estos meses no se oyeron voces de protesta o denuncia, salvo la de Joaquín Baleztena, Jefe Regional del Carlismo, única y honrosa excepción, lamentablemente inatendida. Las severísimas ordenes de suspender las ejecuciones, dictadas en agosto por el coronel Solchaga (día 4) y el propio Mola (día 20), dan la impresión de ser una farsa puesto que, lejos de ser obedecidas, fueron seguidas por un recrudecimiento de los fusilamientos que alcanzaron durante ese mes sus cotas máximas. Tres días después de la prohibición de Mola se produjo la tristemente célebre saca de la cárcel de Pamplona a Valcaldera y el incremento de asesinatos continuó a primeros de septiembre. Durante este mes y el siguiente se mantuvo la intensidad de las ejecuciones, decreciendo a finales de octubre para convertirse posteriormente en un goteo esporádico hasta bien entrado el año 1937, reduciéndose después a las ejecuciones en la Vuelta del Castillo y a la matanza de los fugados del penal de San Cristóbal (22 de mayo de 1938).

En su libro *No me avergoncé del Evangelio*, Marino Ayerra describió la actitud del obispo Marcelino Olaechea, conocedor del drama que estaban viviendo sus diocesanos y que sin embargo no abrió su boca hasta el 15 de noviembre, para pedir el cese del derramamiento de sangre y ésto en un acto privado de imposición de insignias de Acción Católica.

Número de ejecutados: Al ocuparse de la pérdida de vidas humanas y en concreto a las víctimas de la represión, la atención popular y de muchos autores se ha centrado principalmente en calcular el número de muertos, basándose a veces en rumores y otras fríamente, como si las víctimas fuesen piezas de artillería sin vida, sin sentimientos, sin ideales, sin familias, sin una misión en la sociedad. De ahí mi intento, iniciado durante el quinquenio del 75, de realizar un estudio sociológico sobre la pérdida de vidas humanas que supuso la guerra para Navarra en los frentes y en la retaguardia, valorando en cada caso la situación económico-social familiar, la actitud político-religiosa y las circunstancias y fecha de la muerte, basándome en datos de archivos de Juzgados, parroquias, ayuntamientos y privados, y en testimonio oral de familiares y protagonistas. Por circunstancias que no hacen al caso me vi obligado a suspender el estudio, afortunadamente completado y mejorado por *Altaffayla Kultur Taldea*.

Hace tiempo afirmé que “es imposible calcular con exactitud el número de ejecutados” (4), lo que sigue siendo verdad tras los meritorios estudios realizados por el general Ramón Salas Larrazábal y Altaffayla.

Descartamos las cifras de 7.000 y 15.000 barajadas durante la contienda y posteriormente. Los datos ofrecidos con cierta seriedad oscilan entre 678 que dió Jaime del Burgo, 2.288 identificados pero cifrables entre 2.300 y 2.500 que ofrecí personalmente, y unos 1.190 calculados por Salas Larrazábal partiendo de la premisa de que todas las muertes ocasionadas en la guerra fueron inscritas en algún juzgado.(5)

El colectivo Altaffayla ha seguido la metodología de Salas y mía; ha revisado los fondos documentales de los Juzgados de 168 localidades (el 88,29 por ciento de la población total); el Juzgado y cementerio de Zaragoza; registros de cementerios, archivos parroquiales y municipales de 170 ayuntamientos y concejos, cárceles de distrito (Aoiz, Estella, Tafalla, Tudela) y del Fuerte de San Cristóbal; prensa diaria y las relaciones elaboradas por los familiares en cada pueblo, impresas en “recordatorios” funerales y esculpidas en mausoleos de los cementerios, analizando cada caso.

Las conclusiones a que han llegado son:

1º. *EL TOTAL DE LAS MUERTES VIOLENTAS SOBREPASA LAS 2.789*, seguras y comprobadas. Incluyen en ellas los 25 fusilados en el Fuerte inscritos en el Juzgado, y los 225 de la “fuga” de Mayo, no los 305 presos fallecidos por enfermedad en el penal, ni los traídos a fusilar desde Guipúzcoa, Alava, la Rioja y Zaragoza.

2º. *NO TODAS LAS MUERTES FUERON INSCRITAS*. De las 2.789 comprobadas, lo están en algún juzgado 1.598 (57,2 por ciento). El 42,7 por ciento restante no lo ha sido hasta ahora en ninguno (lugar de nacimiento, residencia o defunción). El total de 1.192 ejecutados navarros no inscritos coincide casualmente con el total calculado por Salas Larrazábal.

El elevado porcentaje de muertos no inscritos y un error de cálculo tan abultado restan credibilidad a la metodología y a las conclusiones de Salas Larrazábal, por lo menos en relación con Navarra (6).

Sociología: Altaffayla no se queda ahí, sino que aporta multitud de datos para ulteriores análisis sociológicos.

Por merindades o distritos, sobre una media provincial de 8,17 asesinados por cada mil habitantes, superan el 10 por mil las de Tudela (11,8), Olite (10,7) y Estella (10,4), aunque fuera ésta la más duramente represaliada en cifras absolutas (747 muertos), concretamente las villas próximas al Ebro, destacando Lodosa (4.194 habitantes en 1.930 y 131 vecinos ejecutados) y Sartaguda, propiedad del Duque del Infantado (1.232 habitantes y 87 asesinados).

Las dos merindades montañosas (Pamplona y Sangüesa), incluida la capital, totalizaron 618 muertos. El dato revela que la represión no se cebó sobre núcleos industrializados (Bera, Burunda, Pamplona, Villava, Aoiz), sino en zonas de latifundio con elevados porcentajes de braceros agrícolas que desde hace tiempo venía luchando por conseguir la reversión de comunales para su equitativa distribución entre los vecinos más necesitados.

A la misma conclusión lleva el análisis por profesiones, con predominio rotundo de jornaleros agrícolas (37 por ciento) sobre labradores propietarios (16%), trabajadores autónomos (14%), obreros industriales (9%), funcionarios (7%), comerciantes (3,3%), profesionales liberales (2,4%), maestros (1%) y otros (1,7%) entre los cuales se cuentan